



JUZGADO TRECE (13) LABORAL DEL CIRCUITO MEDELLÍN

Diecinueve (19) de Enero del año de dos mil veinticuatro (2024).

Auto interlocutorio N° 0021

Radicado: 05001 31 05 013 **2019 00554 00**

Dentro del presente proceso ejecutivo Conexo instaurado por **HANS ADRIAN ESPINOSA VERA**, contra de **ROMÁN DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA, ROBINSÓN DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA, DAYRON DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA, NORBEY DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA, MANUELA GÓMEZ ESTRADA, MAYRA ALEJANDRA GÓMEZ LÓPEZ, y LUISA MARÍA GÓMEZ LÓPEZ.**

Procede esta funcionaria judicial a resolver el recurso de reposición, presentado por la apoderada de la apoderada de la parte ejecutada (83Recurso), dentro del cual, presenta reparos al mandamiento de pago, indicando que en el mismo se presentan las siguientes excepciones: Falta de legitimación en la causa por activa; el documento que sirve de base para el recaudo no contiene una obligación clara y expresa, y prescripción.

Sea lo primero señalar que el Artículo 430 del CGP, aplicable en materia laboral y de la seguridad social, en atención al Artículo 145 del CPTSS, en forma literal dispone:

"Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.

..."

Ahora, se tiene que los motivos para recurrir el Auto de apremios, son los referidos a discutir la existencia del título por no reunir las exigencias contempladas en los Artículos 100 del CPTSS y 422 del CGP, por lo que para resolver el recurso interpuesto sólo puede tomar como fundamento probatorio el título aportado en la demanda ejecutiva.

De lo anotado, es claro que, en este momento procesal, tan sólo, esta funcionaria judicial, pasará a pronunciarse sobre lo referido como *"EL DOCUMENTO QUE SIRVE DE BASE PARA EL RECAUDO NO CONTIENE UNA OBLIGACIÓN CLARA Y EXPRESA"*, la cual tiene como fundamento básicamente que no reúne la condición de exigibilidad en la demanda ejecutiva, dado que en su parecer se encuentra *"condicionada"* al pago de la sentencia judicial por parte *"de la entidad demandada ante la justicia administrativa."*

Desde ya, ha de señalarse que se habrá de desestimar el recurso de reposición de la parte demandada, en relación a esta excepción, por las siguientes razones:

Tal como lo admite la recurrente, en el presente caso, existe un título complejo, por cuanto está conformado por varios documentos, por lo que, la claridad, la expresividad y la exigibilidad, no constan en uno solo de ellos, sino del estudio de varios de ellos, siendo obligatorio analizar en conjunto los mismos, para encontrar en ellos los requisitos esenciales, de las normas antes enunciadas.

Pues bien, contrario a lo señalado por la recurrente, no es parte del título ejecutivo el contrato de prestación de servicios suscrito por los demandados, no lo es, en primer lugar y siendo el más relevante, el auto emitido por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, dentro del incidente regulación de honorarios, del 10 de julio de 2013, corregido por providencia del 31 de julio de 2014, que dispuso en forma expresa:

"1. Se regulan los honorarios del doctor Hans Adrián Espinosa Vera en un 45% de lo que se llegue a reconocer en la sentencia, en caso de ser favorable a las pretensiones incoadas."

Pero aclarándose que ello dependía del resultado del proceso administrativo de reparación directa, el cual, como se advierte de la documental adosada con la demanda inicial, apenas fue emitida el 21 de julio de 2016, el cual dispuso:

REVOQUESE la sentencia del 9 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y en consecuencia,

PRIMERO: DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por el Daño antijurídico consistente en la privación injusta de la libertad de Román de Jesús Gómez Mejía.

SEGUNDO: Como consecuencia de ello, **CONDÉNESE** a la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de Román de Jesús Gómez Mejía, Manuela Gómez Estrada, Mayra Alejandra Gómez López, y Luisa María Gómez López, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno; a favor de Robinsón de Jesús, Dayron De Jesús y Norbey De Jesús Gómez Mejía, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno.

TERCERO: CONDÉNESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Román de Jesús Gómez Mejía, ciento veintiocho millones seiscientos seis mil trescientos dos pesos (\$128.606.302)."

Dicho análisis se realizó en el Auto de apremios que ahora recurre.

Ahora, en forma precisa, sobre la condición de exigibilidad, se advierte que ella es definida de manera pacífica por la Corte Suprema de Justicia e vieja data (31 de agosto de 1942, Gaceta Judicial LIV, Pág. 383), como: "La exigibilidad de una obligación es la calidad que la coloca en situación de pago inmediata por no estar sometida a plazo condición o modo, esto es por tratarse de una obligación pura y simple y ya declarada. Cuando se encuentra sometida a algunas de éstas

modalidades y se ha cumplido, igualmente, aquélla pasa a ser exigible".
<https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/biblioteca/m5-13.pdf>

Esto es, que para una obligación sea exigible no puede concurrir condición suspendida que dependa de plazos o condiciones que retrase sus efectos de manera incierta a lo pactado, ya que no podría reclamar su ejecución. La exigibilidad debe darse en el momento en que se presente la demanda.

Es así, que en relación a las condiciones suspensivas, mencionadas por la apoderada recurrente en el contrato de mandato, en forma expresa mencionan:

"TERCERA: EL CONTRATANTE, por su parte se obliga a reconocer y pagar a favor de la ABOGADA como contraprestación por los servicios profesionales por ella prestados en el siguiente porcentaje: El 40% si se logra una conciliación prejudicial o extrajudicial, el 45% si es necesario presentar demanda y se logra una conciliación judicial en la primera instancia, y el 50% si hay que terminar el proceso por sentencia en cualquiera de las dos instancias o por conciliación judicial en la segunda instancia; del resultado favorable de la gestión que realice, suma que la ABOGADA puede descontar directamente de todos los pagos que se hagan.

CUARTA: En caso de que EL CONTRATANTE por cualquier motivo, revoque el poder otorgado a la ABOGADA para dicha gestión, se obliga en todo caso a reconocer y pagar la suma pactada en esta cláusula, una vez quede ejecutoriada la respectiva sentencia favorable o acto que apruebe la conciliación. En caso de que no lo hiciere así este documento prestará merito ejecutivo para exigir jurídicamente el cumplimiento de la mencionada obligación."

Precisamente, la cláusula tercera no se pudo aplicar en su integridad, en la medida, en que, la parte demandada en este proceso, demandante en aquel, revocó el poder, por lo que, se aplicaría la cláusula cuarta, es decir, *"...reconocer y pagar la suma pactada en esta cláusula, una vez quede ejecutoriada la respectiva sentencia favorable..."*.

Y como se advierte de la documental anexa con la demanda ejecutiva, se encuentra que la sentencia favorable se encuentra ejecutoriada, desde el día 07 de julio de 2017 (Pagina 15 PDF 01Expediente. Así:

La Providencia mediante la cual se fijaron honorarios en el radicado de la referencia, quedó debidamente ejecutoriada el día quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), a las cinco de la tarde (5:00 p.m.). Igualmente, **la Sentencia** que puso fin al referido proceso, cobró su ejecutoria el día siete (07) de julio de dos mil diecisiete (2017), a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).

Trata de inducir la apoderada recurrente al despacho en error, al hacer una interpretación sesgada de la parte final de la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios, que en literalmente dispone *"...del resultado favorable de la gestión que realice, suma que la ABOGADA puede descontar directamente de todos los pagos que se hagan."*; pues en parte alguna indica que el pago de los honorarios se hará una vez se cancele la sentencia judicial, no, lo que se menciona allí, es que "puede" descontar de lo pagado.

Se itera, por la importancia que merece, que el pago de los honorarios al abogado, no se encuentra condicionado a que la entidad demandada, cancelara la sentencia a la parte demandante, acá ejecutada, por lo que la exigibilidad del título ejecutivo se encuentra más que satisfecho.

Ahora, sobre la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, la misma se habrá de resolver en el momento respectivo, es decir, de la Audiencia contemplada en el Artículo 443 del CGP, recordando que la Corte Suprema de Justicia ha definido, que la legitimación en la causa es un presupuesto sustancial indispensable para estimar las pretensiones de la demanda, en la medida en que una de las partes tiene la titularidad de exigir de la otra el cumplimiento de una obligación en consideración a la relación jurídico-sustancial existente entre ellas.

Frente a la falta de tal presupuesto, en sentencia SC1230 de 25 de abril de 2018 la Sala Civil enseñó que sea por activa o por pasiva, no impide que se resuelva de fondo la litis, sino que se constituye en un motivo para decidirla adversamente al actor, al no tratarse de un presupuesto procesal, lo que resumió en los siguientes términos:

"...preciso es notar cómo la legitimación en la causa, ha dicho insistentemente la Corte, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste. Por eso, su ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis, sino motivo para decidirla adversamente, pues ello es lo que se aviene cuando quien reclama un derecho no es su titular o cuando lo aduce ante quien no es el llamado a contradecirlo, pronunciando ese que, por ende, no sólo tiene que ser desestimatorio sino con fuerza de cosa juzgada material para que ponga punto final al debate, distinto de un fallo inhibitorio carente de sentido lógico por cuanto tras apartarse de la validez del proceso siendo éste formalmente puro, conduce a la inconveniente práctica de que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo o para que siéndolo en la realidad lo aduzca nuevamente frente a quien no es el llamado a responder."

Sobre la excepción de PRESCRIPCIÓN, la decisión es la misma que la anterior, en los términos del Artículo 100 del CGP, y en consonancia con el Artículo 282 del mismo estatuto, que dispone:

"Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda."

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.

Si el Juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción."

Notificación por conducta concluyente

verificados los presupuestos del Artículo 301 del CGP se tendrá notificado por conducta concluyente del Auto por medio del cual se libró mandamiento de pago a los ejecutados **MAYRA ALEJANDRA GÓMEZ LÓPEZ, LUISA MARÍA GÓMEZ LÓPEZ, y NORBEY DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA**, desde el 27 de Octubre de 2023, fecha, en la que se le reconoció personería a la apoderada de los mismos. (86AutoRenunciaReconocePersoneria)

Ahora, el ejecutante de dejar sin efectos el Auto del 27 de Octubre de 2023 *"por cuanto se siguió con el trámite del proceso sin cumplir previamente a cabalidad, con lo ordenado por el Tribunal*

Superior de Medellín – Sala Laboral -, y obviando lo contenido en el auto de cúmplase lo resuelto por el Superior; ya que hasta este momento no se han incluido en el Registro Nacional de Personas Emplazadas.”.

Sin embargo, no es procedente acceder a lo pedido, en la medida en que la notificación por conducta concluyente Mayra Alejandra Gómez López, Luisa María Gómez López, y Norbey de Jesús Gómez Mejía, podría subsumir la inclusión en el Registro Nacional de Personas Emplazadas pero este procedimiento se encuentra realizado, según consulta realizada en el TYBA desde el 28 de julio de 2021 (90RegistroNacionalEmplazadosCompleto), pero por la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Medellín se acata y se registrará nuevamente (92NuevoRegistroNacionalEmplazados), por lo que se negará dicha petición.

Una vez ejecutoriada la presente decisión se continuará con el trámite que corresponda.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el Auto del 25 de octubre de 2019, por el cual se libró mandamiento de pago, complementado el día 07 de julio de 2020, según lo previsto en la parte motiva de ésta providencia.


SEGUNDO: DAR POR NOTIFICADOS POR CONDUCTA CONCLUYENTE, de la presente demanda ejecutiva, a los ejecutados MAYRA ALEJANDRA GÓMEZ LÓPEZ, LUISA MARÍA GÓMEZ LÓPEZ y NORBEY DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA, desde el 27 de octubre de 2023, según se analizó en las consideraciones.

TERCERO: Se niega solicitud del ejecutante, según lo previsto en la parte motiva de ésta providencia.

NOTIFÍQUESE

LAURA FREIDEL BETANCOURT
JUEZA

hespinosavera@yahoo.com; manuelalopez887@gmail.com; chem59@hotmail.com; linaco25@hotmail.com

| |
|---|
| <p>LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO HACE CONSTAR</p> <p>Que conforme a la Ley 2213 de 2022, el presente auto se notificó por estados, el día 22/01/2024</p> <p>consultable aquí:</p> <p>PUBLICACIÓN DE ESTADOS AÑO 2024 – JUZGADO TRECE LABORAL CIRCUITO DE MEDELLÍN</p> <p></p> <p>ÁNGELA MARÍA GALLO DUQUE Secretaria</p> |
|---|

Firmado Por:
Laura Freidel Betancourt
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Laboral 013
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3cc294e05c81cec95be88c79e3a644508e0953d9fe1e77cb435d4c6266602b26**

Documento generado en 19/01/2024 07:39:39 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>